

38 / Al borde del derrumbe

TATIANA ACEVEDO GUERRERO



EL PACTO DEL FRENTE NACIONAL fue diseñado para poner fin a la confrontación de los años 40 y 50, salir del gobierno militar del general Rojas y retornar al gobierno civil. Como los partidos habían vivido tensiones profundas y la confrontación armada rural había dejado un legado de alrededor de 200.000 muertes, el pacto consistió en un entramado de garantías mutuas. Aparte de la coordinación que permitió una rotación en cargos de elección popular, el Frente arrancó con el impulso de reformar el Estado y mover el rumbo del país. Entre los impulsos que el liberalismo trajo estaba la redistribución de la tierra cultivable, que otros liberales habían soñado e intentado sin éxito.

Además, el Frente fue desde sus inicios un tiempo de huelga, paros cívicos y revueltas ciudadanas. El primer paro del período fue organizado por el barrio Tunjuelito de Bogot

tá en 1958 para protestar por la construcción del relleno sanitario Doña Juana, cerca de sus residencias. Entre 1959 y 1963, paros cívicos reclamaron el alto costo de vida y el acceso a servicios públicos como el agua y la electricidad. Durante estos mismos años, simultáneos paros en los ingenios azucareros del Valle exigieron condiciones dignas y fueron declarados ilegales. El Estado autorizó el despido masivo de trabajadores y los bloqueos fueron reprimidos por el ejército. Tanto sería la violencia, que el periódico *El Siglo*, que nunca reconocía ningún tipo de represión, registró la muerte de dos trabajadores. Otra de las huelgas importantes fue la protagonizada en 1961 por los empleados de Avianca. La huelga fue reprimida cuando los empleados bloquearon la avenida El Dorado. Periódicos como *La República* vieron con angustia la solidaridad entre empleados y estudiantes, pues frente a una de las arremetidas contra los manifestantes, estos se refugiaron en la Universidad Nacional y junto con los estudiantes resistieron a la policía. En el 62 fueron importantes las huelgas de trabajadores de Coltejer y Cementos El Cairo

en Antioquia y de la fábrica de fibras sintéticas Celenease, en Yumbo, Valle del Cauca.

1963 comenzó con algunas propuestas en el Congreso y el Ejecutivo, que entendían la precaria situación de los trabajadores y hablaban sobre la necesidad de subir los salarios mínimos. Pero aunque había dentro del propio Gobierno impulsos de reforma, fueron más importantes las inercias a la hora de escuchar las demandas de sindicatos y otros grupos que salían a marchar. En febrero de 1963, obreros y obreras de la empresa de Cementos El Cairo (hoy Argos) declararon una huelga en búsqueda de mejores condiciones salariales. Como la huelga en Santa Bárbara, Antioquia, bloqueaba una vía de manera pacífica, el ejército intervino con gases lacrimógenos, empezó a disparar y asesinó a 12 personas, entre ellas una niña que salía del colegio. En los días que siguieron el gobernador de Antioquia respaldó las acciones de las Fuerzas Armadas y el diario *La República* las justificó. "De no haber habido una agresión inspirada por mano oculta, por la mano roja que viene operando en Venezuela y en todo el continente para cumplir consignas extrañas,

el ejército no hubiera tenido que disparar".

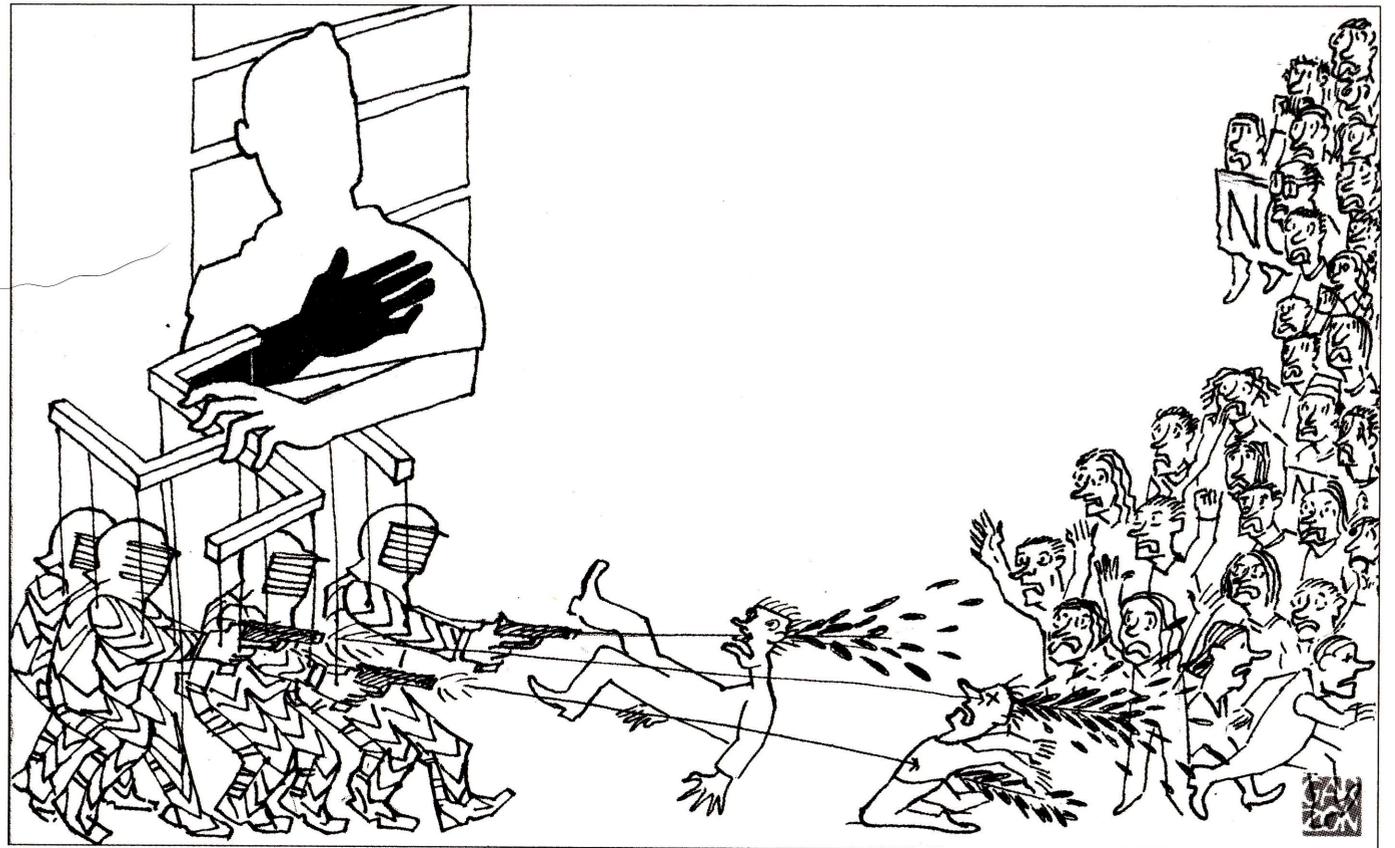
Al acabar el período presidencial de Valencia, en 1966, se emitió el Decreto 939 y los movimientos de huelga en el país comenzaron a ser reprimidos con mayor premura. Se autorizaron despidos masivos en Bavaria, Minerales Nacionales, Cauchosol, Pasteurizadora San Luis, Cementos Diamante y Ecopetrol. Al igual que las protestas estudiantiles, el Gobierno empleó la justicia penal militar para juzgar a trabajadores involucrados. Todas las demandas laborales, estudiantiles y cívicas fueron recibidas no solo con violencia estatal, sino también con declaraciones oficiales muy parecidas, protocolarias, vacías de sentido y repitiendo que "acá no pasa nada". En respuesta, uno de los editoriales de *El Espectador* afirmó que tal "farrago de palabrería oficialista nada remedia, nada corrige, nada proviene para lo venidero". El escrito también vaticinó que dichas "lamentaciones" solo "contribuyen al desvío de la atención pública hacia los resultados de unos hechos penosos para que no se advierta que las causas de esos hechos están vivas y listas a provocar quizá peores".

La historia en las calles

WILLIAM OSPINA



Cartones de Garzón



LA AVALANCHA LLEVABA MUCHOS meses represándose y solo hizo falta la propuesta estúpida y cínica de la reforma tributaria para que se desbordara.

Colombia necesitaba unirse, y nada un tanto como una desgracia común. La desgracia ha consistido en varias plagas simultáneas: un viejo sistema injusto y corrupto hasta los tuétanos, una pandemia pésimamente manejada, y un gobierno central inepto pero capaz de iniciativas torpes y malignas.

El resultado: un estallido social que se veía venir desde hace muchos meses, desde antes de la pandemia, y que ha tenido erupciones precedentes y crecientes. Desde el famoso paro agrario que según el gobierno de entonces no existía, pasando por los paros estudiantiles, las parálisis del transporte, las movilizaciones de la minga indígena y las marchas trágicas de noviembre del año 20, brutalmente reprimidas por la policía con un saldo de crímenes de Estado que aún no se aclaran.

Duque pudo haberle ahorrado al país la actual racha de muertos y los desastres económicos del paro, retirando a tiempo, como se lo propusieron hasta sus aliados, una reforma tributaria inconveniente, inoportuna, insensata, insensible y por ello mismo criminal.

Pero los ineptos suelen sucumbir al embrujo de los vanidosos, y el ministro Carrasquilla convenció al presidente de que los gastos de la crisis los debía pagar la misma clase media que aquí tiene que pagar todo.

Todos los países han recurrido a la banca central para paliar la crisis y han apretado temporalmente la presión fiscal sobre las grandes fortunas; aquí los burócratas perfumados han convertido en un dogma inamovible lo que llaman el servicio de la deuda aun por encima de la supervivencia del pueblo.

Son muchos los países que han pasado por la necesidad de demorarse en el pago o de renegociar la deuda, como ocurre en los negocios privados. Nuestros gobiernos y nuestros economistas primero comprometen la deuda y manejan los recursos a su antojo, pero después no la pagan con los frutos de su previsión sino con la plata que arrancan y vuelven a arrancar del bolsillo de los que trabajan y pagan impuestos.

No invierten en productividad, no rediseñan la economía, no amplían la capacidad de

tributación, gastan a su capricho la deuda, y pagan con la sangre del pobre, eso sí, con toda puntualidad. Dicen que lo hacen para salvar la calificación del país, pero hay otro motivo más rastrero: mantener sus intachables hojas de vida como funcionarios siempre ávidos de escalar posiciones en la burocracia internacional. Trabajan más a favor de la banca mundial que de su propio país.

Ningún país pierde el honor por renegociar una deuda; hasta los calificadores del riesgo saben que son los gajes del oficio, y mucho más en una catástrofe mundial como la actual pandemia. Es más, Colombia muy pronto tendrá que negociar una moratoria siquiera de tres años en el pago de la deuda, para financiar con grandes recursos la recuperación agraria, la modernización de la infraestructura, la renta básica que le permita a la comunidad alzar cabeza y dinamizar la economía, emprender a gran escala la producción de alimentos orgánicos, invertir en industria ecológica y en la transición a energías limpias que nos ponga de verdad en el siglo XXI. Lo haremos honrando la deuda,

pero pagándola con rentas renovadas y no exprimiendo los bolsillos de una ciudadanía extenuada y sin esperanzas.

El paro ha decidido continuar hasta detener la también abusiva reforma del sistema de salud, que proyecta dejarlo del todo en manos de los que mercadean con la vida. Y yo diría que lo que más necesitamos ahora es una renta básica que no sea cargada al bolsillo de la clase media, y un ingreso social urgente para millones de jóvenes desamparados.

El triunfo que Colombia acaba de obtener tan arduamente no es solo el retiro de la vergonzosa reforma tributaria y del todavía más vergonzoso ministro Carrasquilla, sino haberlo logrado por la acción solidaria de millones de ciudadanos, empezando por los jóvenes, mujeres y hombres, el disciplinado movimiento sindical, los transportadores que aprovisionan a las ciudades, los indígenas y la población afro, cada vez más protagonistas de nuestra historia, y una ciudadanía alegre, valiente, que jamás se rinde.

Claro que hay fuerzas a las que les con-

viene el caos, y los manifestantes pacíficos tienen que aislarlas y neutralizarlas, pero, como ya he dicho antes, lo que hay aquí es menos vandalismo que desesperación. En toda conmoción social arden llantas y vuelan vidrios, pero es criminal que las fuerzas armadas salgan a darle bala al pueblo. En esto hay que ser severos, porque es necesario que al pueblo, ya que no le muestran cariño, le muestren respeto.

El gobierno ha cometido el peor error: ha traicionado a la clase media que lo eligió. Y esa clase media así traicionada no puede ignorar que en estas jornadas el pueblo pobre luchó por ella.

Ahora el gobierno corre el riesgo suicida de seguir oyendo a sus malos consejeros: por ejemplo a los que creen que un estallido social es una conspiración maligna que se corrige con represión y con asesinatos.

Y más vale que el gobierno y sus malos consejeros no olviden que hace tres meses en los Estados Unidos está gobernando una conciencia nueva de cuáles son los vientos de la historia.